

LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

INTRODUCCIÓN

La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, en su sesión del 5 de abril de 2004 aprobó el Dictamen que propone la modificación de la actual Ley N° 26435, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que se origina en los Proyectos de Ley N° 223/ 2001-CR, 3185/2002-CR, 8011/2003-CR, 9508/2003-CR y 9660/2003-CR.

El dictamen tiene como base el proyecto de ley presentado por el Tribunal Constitucional, mediante el cual propone una modificación integral de la Ley Orgánica que la rige, incorporando diversos derechos a favor de los magistrados y facultades del Tribunal, así como la creación del Centro de Estudios Constitucionales.

Los demás proyectos de ley presentados desarrollan temas puntuales como el derecho de abstención, el proceso de elección de nuevos magistrados, la restitución del plazo original para la presentación de la demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

CONTENIDO

El dictamen propone la modificación de la actual Ley N° 26435, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, con el objetivo de permitir una mayor eficacia de la justicia constitucional actualizando y adecuando a la realidad el desarrollo funcional de esta institución.

El texto que se formula consta de 23 artículos, tres disposiciones generales y una disposición derogatoria. El dictamen plantea básicamente que el Tribunal Constitucional sea el órgano supremo de interpretación, integración y control de la Constitución Política.

Seguidamente, desarrolla el artículo 107 de la Constitución que otorga al Tribunal Constitucional iniciativa legislativa en las materias que le son propias; se recoge el principio de irrecusabilidad de los magistrados y el derecho de abstención, se adiciona causales de impedimento para ser magistrado del tribunal. Se puede citar como ejemplo el caso por el cual, el candidato ha sido declarado en estado de insolvencia o ha ejercido cargos de dirección o de confianza en gobiernos de facto.

Asimismo, se amplían los derechos y prerrogativas de los magistrados señalándose que perciben la compensación por tiempos de servicios que determina la ley, reciben los honores inherentes a su cargo en caso de muerte y en ese caso, el Tribunal asume los gastos que origine el sepelio.

Se ha eliminado el procedimiento de suspensión de los magistrados que deben sujetarse a lo establecido por los artículos 99 y 100 de la Constitución.

Finalmente, se crea el Centro de Estudios Constitucionales como órgano académico y técnico de apoyo al desarrollo y cumplimiento de objetivos del Tribunal Constitucional.

COMENTARIO

En la actualidad se ha tomado conciencia que los sistemas constitucionales funcionan en base al principio de la supremacía de la Constitución Política de los Estados. En ese sentido, diversos países han desarrollado en el principio del bloque de constitucional como el ámbito reservado a la Constitución que va involucrado con otras normas de especial jerarquía que conforman el ordenamiento constitucional.

El Tribunal Constitucional fue creado en el Perú por la Constitución Política del año de 1979, el cual entró en funciones en noviembre de 1982 para resolver las acciones de inconstitucionalidad contra normas legales y los recursos de casación contra resoluciones de la Corte Suprema.

De esta manera, el sistema constitucional se va consolidando al dotársele de un ámbito propio y orientado no sólo a la acción dentro de una jurisdicción especial, sino también a propiciar la interacción de toda la sociedad en la búsqueda del respeto al sistema basado en la supremacía de la Constitución y logrando así un verdadero Estado de derecho.

Según nuestra actual Constitución, en su artículo 201 señala que el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución, autónomo e independiente, y se le ha confiado la defensa del principio de supremacía constitucional, contra las leyes o actos de los órganos del Estado que pretendiesen socavarlo; interviene para restablecer el respeto a la Constitución en general y de los derechos constitucionales en particular.

El Tribunal Constitucional conoce en última y definitiva instancia los procesos de Garantías Constitucionales, sobre todo el territorio nacional mediante el Recurso Extraordinario de Revisión y los conflictos de competencias, además de las acciones de inconstitucionalidad.

El Tribunal Constitucional se hace realidad en la Carta de 1979, donde se trata el tema del control difuso también. En la constitución vigente de 1993, se tienen ambos controles: el judicial y difuso y, por otro lado el control concentrado, ahora Tribunal Constitucional.

La Carta de 1993 señala en su artículo 202 las atribuciones del Tribunal Constitucional, donde refiere que conoce en forma directa y única, la acción de inconstitucionalidad; conoce los Recursos Extraordinarios de Revisión en última instancia, en los procesos de Hábeas Corpus, Acción de Amparo, Hábeas Data, Acción de Cumplimiento y resuelve los conflictos de competencia o de atribuciones señalados por la ley, entre reparticiones del Estado.

La propuesta de Ley Orgánica del Tribunal Constitucional busca actualizar y adecuando a la realidad el desarrollo funcional de esta institución, la cual se complementa con la propuesta de creación de un Código Procesal Constitucional que la misma comisión ha aprobado, separando de esta manera los procesos constitucionales que aborda la actual Ley Orgánica (procesos de Inconstitucionalidad y la resolución en última instancia de las resoluciones denegatorias de Hábeas Corpus, Amparo y la

Acción de Cumplimiento), para que sean tratados de manera sistemática por el Código Procesal Constitucional.

La propuesta complementa la definición del Tribunal Constitucional al agregar que es el órgano supremo de interpretación e integración, lo que da mayor claridad a las atribuciones de este organismo constitucional, reafirmando su autonomía e independencia, dándole mayor fuerza a los principios jurisprudenciales que sobre materia constitucional recoja el Tribunal.

Sin embargo, existen algunos artículos que podrían generar algunos problemas, como el referido a la suspensión de Magistrados, donde se ha retirado la parte concerniente a que los delitos contra los deberes de función que cometan los Magistrados del Tribunal se sujetan a lo dispuesto en los Artículos 99 y 100 de la Carta de 1993, que a pesar que se encuentra regulado en la Constitución, debería hacer referencia a los mismos.

Finalmente, la creación del Centro de Estudios Constitucionales como órgano académico y técnico del Tribunal Constitucional, permitirá fomentar el análisis de la realidad jurídica y sociopolítica nacional e internacional, promoviendo estudios sobre los sistemas políticos, constitucionales y administrativos. A continuación, se acompaña el cuadro de Competencias del Tribunal Constitucional señaladas en diversas constituciones de diferentes países latinoamericanos.

COMPETENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SEÑALADAS EN DIVERSAS CONSTITUCIONES

PAÍSES	CONSTITUCIONES
BOLIVIA	<p>Artículo 120.- Son atribuciones del Tribunal Constitucional conocer y resolver:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. En única instancia, los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, decretos y cualquier género de resoluciones no judiciales. Si la acción es de carácter abstracto y remedial, sólo podrán interponerla el Presidente de la República, o cualquier Senador o Diputado, el Fiscal General de la República o el Defensor del Pueblo. b. Los conflictos de competencias y controversias entre los Poderes Públicos, la Corte Nacional Electoral, los departamentos y los municipios. c. Las impugnaciones del Poder Ejecutivo a las resoluciones camarales, prefecturales y municipales; d. Los recursos contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones creados, modificados o suprimidos en contravención a lo dispuesto en esta Constitución. e. Los recursos contra resoluciones del Poder Legislativo o una de sus cámaras, cuando tales resoluciones afecten a uno o más derechos o garantías concretas, cualesquiera sean las personas afectadas; f. Los recursos directos de nulidad interpuestos en resguardo del artículo 31 de esta Constitución. g. La revisión de los recursos de amparo constitucional y "habeas corpus"; h. Absolver las consultas del Presidente de la República, el Presidente del Honorable Congreso Nacional y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, sobre la constitucionalidad de proyectos de ley, decretos o resoluciones, o de leyes, decretos o resoluciones aplicables a un caso concreto. La opinión del Tribunal Constitucional es obligatoria para el órgano que efectúa la consulta; i. La constitucionalidad de tratados o convenios con gobiernos extranjeros u

	<p>organismos internacionales;</p> <p>Las demandas respecto a procedimientos en la reforma de la Constitución.</p>
<p>COLOMBIA</p>	<p>Artículo 241.- A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirán las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformativos de la Constitución, cualquiera que sea su origen, sólo por vicios de procedimiento en su formación. 2. Decidir, con anterioridad al pronunciamiento popular, sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, sólo por vicios de procedimiento en su formación. 3. Decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las consultas populares y plebiscitos del orden nacional. Estos últimos sólo por vicios de procedimiento en su convocatoria y realización. 4. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto en su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación. 5. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presentaren los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno con fundamento en los artículos 150 numeral 10 y 341 de la Constitución, por su contenido material o por vicios de procedimiento en su formación. 6. Decidir sobre las excusas de que trata el artículo 137 de la Constitución. 7. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el Gobierno con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución. 8. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el Gobierno como inconstitucionales, y de los proyectos de leyes estatutarias, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación. 9. Revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales. 10. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Con tal fin, el Gobierno los remitirá a la Corte, dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionales, el Gobierno podrá efectuar el canje de notas; en caso contrario no serán ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexecutable por la Corte Constitucional, el Presidente de la República sólo podrá manifestar el conocimiento formulando la correspondiente reserva. 11. Darse su propio reglamento. <p>Parágrafo: Cuando la Corte encuentre vicios de procedimiento subsanables en la formación del acto sujeto a su control, ordenará devolverlo a la autoridad que lo profirió para que, de ser posible, enmiende el defecto observado. Subsanao el vicio, procederá a decidir sobre la exequibilidad del acto.</p> <p>Artículo 242.- Los procesos que se adelanten ante la Corte Constitucional en las materias que se refiere este título, serán regulados por la ley conforme a las siguientes disposiciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cualquier ciudadano podrá ejercer las acciones públicas previstas en el artículo precedente, e intervenir como impugnador o defensor de las normas sometidas a control en los procesos promovidos por otros, así como en aquellos para los cuales no existe acción pública. 2. El Procurador General de la Nación deberá intervenir en todos los procesos. 3. Las acciones por vicios de forma caducan en el término de una año, contado desde la publicación del respectivo acto. 4. De ordinario, la Corte dispondrá del término de sesenta días para decidir, y el Procurador General de la Nación, de treinta para rendir concepto. 5. En los procesos a que se refiere el numeral 7 del artículo anterior. los términos

	<p>ordinarios se reducirán a una tercera parte y su incumplimiento es causal de mala conducta, que será sancionada conforme a la ley.</p> <p>Artículo 243.- Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional.</p> <p>Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexecutable por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución.</p> <p>Artículo 244.- La Corte Constitucional comunicará al Presidente de la República o al Presidente del Congreso, según el caso, la iniciación de cualquier proceso que tenga por objeto el examen de constitucionalidad de normas dictadas por ellos. Esta comunicación no dilatará los términos del proceso.</p>
<p>CHILE</p>	<p>Artículo 82.- Son atribuciones del Tribunal Constitucional:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes orgánicas constitucionales antes de su promulgación y de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución; 2. Resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso; 3. Resolver las cuestiones que se susciten sobre la constitucionalidad de un decreto con fuerza de ley; 4. Resolver las cuestiones que se susciten sobre constitucionalidad con relación a la convocatoria a un plebiscito, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Tribunal Calificador de Elecciones; 5. Resolver los reclamos en caso de que el Presidente de la República no promulgue una ley cuando deba hacerlo, promulgue un texto diverso del que constitucionalmente corresponda o dicte un decreto inconstitucional; 7. Resolver sobre la constitucionalidad de un decreto o resolución del Presidente de la República que la Contraloría haya representado por estimarlo inconstitucional, cuando sea requerido por el Presidente en conformidad al artículo 88; 8. Declarar la inconstitucionalidad de las organizaciones y de los movimientos o partidos políticos, como asimismo la responsabilidad de las personas que hubieren tenido participación en los hechos que motivaron la declaración de inconstitucionalidad, en conformidad a lo dispuesto en los incisos sexto, séptimo y octavo del número 15.º del artículo 19 de esta Constitución. Sin embargo, si la persona afectada fuere el Presidente de la República o el Presidente electo, la referida declaración requerirá, además, el acuerdo del Senado adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio; 9. Derogado. 10. Informar al Senado en los casos a que se refiere el artículo 49 No. 7 de esta Constitución; 11. Resolver sobre las inhabilidades constitucionales o legales que afecten a una persona para ser designada Ministro de Estado, permanecer en dicho cargo o desempeñar simultáneamente otras funciones; 12. Pronunciarse sobre las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de los parlamentarios, y 13. Resolver sobre la constitucionalidad de los decretos supremos dictados en el ejercicio de la potestad reglamentaria del Presidente de la República, cuando ellos se refieran a materias que pudieran estar reservadas a la ley por mandato del artículo 60. <p>El Tribunal Constitucional podrá apreciar en conciencia los hechos cuando conozca de las atribuciones indicadas en los números 7., 9. y 10., como, asimismo, cuando conozca de las causales de cesación en el cargo de parlamentario.</p> <p>En el caso del número 1., la Cámara de origen enviará al Tribunal Constitucional el proyecto respectivo dentro de los cinco días siguientes a aquel en que quede totalmente tramitado por</p>

el Congreso.

En el caso del número 2., el Tribunal sólo podrá conocer de la materia a requerimiento del Presidente de la República, de cualquiera de las Cámaras o de una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, siempre que sea formulado antes de la promulgación de la ley.

El Tribunal deberá resolver dentro del plazo de diez días contado desde que reciba el requerimiento, a menos que decida prorrogarlo hasta por otros diez días por motivos graves y calificados.

El requerimiento no suspenderá la tramitación del proyecto; pero la parte impugnada de éste no podrá ser promulgada hasta la expiración del plazo referido, salvo que se trate del proyecto de Ley de Presupuestos o del proyecto relativo a la declaración de guerra propuesta por el Presidente de la República.

En el caso del número 3., la cuestión podrá ser planteada por el Presidente de la República dentro del plazo de diez días cuando la Contraloría rechace por inconstitucional un decreto con fuerza de ley. También podrá ser promovida por cualquiera de las Cámaras o por una cuarta parte de sus miembros en ejercicio en caso de que la Contraloría hubiere tomado razón de un decreto con fuerza de ley que se impugne de inconstitucional. Este requerimiento deberá efectuarse dentro del plazo de treinta días, contado desde la publicación del respectivo decreto con fuerza de ley.

En el caso del número 4., la cuestión podrá promoverse a requerimiento del Senado o de la Cámara de Diputados, dentro de diez días contados desde la fecha de publicación del decreto que fije el día de la consulta plebiscitaria.

El Tribunal establecerá en su resolución el texto definitivo de la consulta plebiscitaria, cuando ésta fuere procedente.

Si al tiempo de dictarse la sentencia faltaren menos de treinta días para la realización del plebiscito, el Tribunal fijará en ella una nueva fecha comprendida entre los treinta y los sesenta días siguientes al fallo.

En los casos del número 5., la cuestión podrá promoverse por cualquiera de las Cámaras o por una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, dentro de los treinta días siguientes a la publicación o notificación del texto impugnado o dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que el Presidente de la República debió efectuar la promulgación de la ley. Si el Tribunal acogiere el reclamo promulgará en su fallo la ley que no lo haya sido o rectificará la promulgación incorrecta.

En el caso del número 9., el Tribunal sólo podrá conocer de la materia a requerimiento de la Cámara de Diputados o de la cuarta parte de sus miembros en ejercicio.

Habrá acción pública para requerir al Tribunal respecto de las atribuciones que se le confieren por los números 7. y 10. de este artículo.

Sin embargo, si en el caso del número 7. la persona afectada fuere el Presidente de la República o el Presidente electo, el requerimiento deberá formularse por la Cámara de Diputados o por la cuarta parte de sus miembros en ejercicio.

En el caso del número 11., el Tribunal sólo podrá conocer de la materia a requerimiento del Presidente de la República o de no menos de diez parlamentarios en ejercicio.

En el caso del número 12., el Tribunal sólo podrá conocer de la materia a requerimiento de cualquiera de las Cámaras, efectuado dentro de los treinta días siguientes a la publicación o notificación del texto impugnado.

Artículo 83.- Contra las resoluciones del Tribunal Constitucional no procederá recurso alguno, sin perjuicio de que puede el mismo Tribunal, conforme a la ley, rectificar los errores de hecho en que hubiere incurrido.

	<p>Las disposiciones que el Tribunal declare inconstitucionales no podrán convertirse en ley en el proyecto o decreto con fuerza de ley de que se trate. En los casos de los números 5. y 12. del artículo 82, el decreto supremo impugnado quedará sin efecto de pleno derecho, con el solo mérito de la sentencia del Tribunal que acoja el reclamo.</p> <p>Resuelto por el Tribunal que un precepto legal determinado es constitucional, la Corte Suprema no podrá declararlo inaplicable por el mismo vicio que fue materia de la sentencia.</p>
ECUADOR	<p>Artículo 276.- Competerá al Tribunal Constitucional:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad, de fondo o de forma, que se presenten sobre leyes orgánicas y ordinarias, decretos-leyes, decretos, ordenanzas; estatutos, reglamentos y resoluciones, emitidos por órganos de las instituciones del Estado, y suspender total o parcialmente sus efectos. 2. Conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de los actos administrativos de toda autoridad pública. La declaratoria de inconstitucionalidad conlleva la revocatoria del acto, sin perjuicio de que el órgano administrativo adopte las medidas necesarias para preservar el respeto a las normas constitucionales. 3. Conocer las resoluciones que denieguen el hábeas corpus, el hábeas data y el amparo, y los casos de apelación previstos en la acción de amparo. 4. Dictaminar sobre las objeciones de inconstitucionalidad que haya hecho el Presidente de la República, en el proceso de formación de las leyes. 5. Dictaminar de conformidad con la Constitución, tratados o convenios internacionales previo a su aprobación por el Congreso Nacional. 6. Dirimir conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución. 7. Ejercer las demás atribuciones que le confieran la Constitución y las leyes. <p>Las providencias de la Función Judicial no serán susceptibles de control por parte del Tribunal Constitucional.</p> <p>Artículo 278.- La declaratoria de inconstitucionalidad causará ejecutoria y será promulgada en el Registro Oficial. Entrará en vigencia desde la fecha de su promulgación y dejará sin efecto la disposición o el acto declarado inconstitucional. La declaratoria no tendrá efecto retroactivo, ni respecto de ella habrá recurso alguno.</p> <p>Si transcurridos treinta días desde la publicación de la resolución del Tribunal en el Registro Oficial, el funcionario o funcionarios responsables no la cumplieren, el Tribunal, de oficio o a petición de parte, los sancionará de conformidad con la ley.</p> <p>Artículo 279.- El Tribunal Constitucional informará anualmente por escrito al Congreso Nacional, sobre el ejercicio de sus funciones.</p>
PARAGUAY	<p><u>Artículo 260.-</u> DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES DE LA SALA CONSTITUCIONAL- Competencia de la Corte Suprema.</p>
PERÚ	<p>Artículo 202.- Corresponde al Tribunal Constitucional:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad. 2. Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento. 3. Conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la Constitución, conforme a la ley. <p>Artículo 203.- Normas de impartición de justicia.</p> <p>Artículo 204.- La sentencia del Tribunal que declara la inconstitucionalidad de una norma se publica en el diario oficial. Al día siguiente de la publicación, dicha norma queda sin efecto.</p>

	<p>No tiene efecto retroactivo la sentencia del Tribunal que declara inconstitucional, en todo o en parte, una norma legal.</p>
<p>VENEZUELA</p>	<p>Artículo 335.- El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República.</p> <p>Artículo 336.- Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de los cuerpos legislativos nacionales que colidan con esta Constitución. 2. Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes estatales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución y que colidan con ésta. 3. Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley dictados por el Ejecutivo Nacional que colidan con esta Constitución. 4. Declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecución directa e inmediata de la Constitución, dictados por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del Poder Público. 5. Verificar, a solicitud del Presidente o Presidenta de la República o de la Asamblea Nacional, la conformidad de la Constitución con los tratados internacionales suscritos por la República antes de su ratificación. 6. Revisar, en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaren estados de excepción dictados por el Presidente o Presidenta de la República. 7. Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del legislador o la legisladora nacional, estatal o municipal, cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución, o las haya dictado en forma incompleta, y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección. 8. Resolver las colisiones que existan entre diversas disposiciones legales y declarar cuál de éstas debe prevalecer. 9. Dirimir las controversias constitucionales que se susciten entre cualesquiera de los órganos del Poder Público. 10. Revisar las sentencias de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica. 11. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley.